

# El zorro guarda las gallinas

Hace pocos días un compañero me pasó un correo cuyo texto reproduzco a continuación:

*"EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE (VALENCIA) HA DESPEDIDO A 108 TRABAJADORES DE LOS 258 EMPLEADOS CON LOS QUE CONTABA, 79 SON CIENTÍFICOS, LOS QUE SE QUEDAN TIENEN UNA REDUCCIÓN DE SALARIO. SE HAN CERRADO 14 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, ALGUNAS ERAN SOBRE EL CÁNCER, PARKINSON O ALZHEIMER.*

*PERO HAN GASTADO 3 MILLONES DE € ORGANIZANDO UN CAMPEONATO DE GOLF DE UN FIN DE SEMANA EN CASTELLÓN. 15 MILLONES DE € EN UNAS TORRES DE CALATRAVA QUE AL FINAL NO SE VAN A CONSTRUIR. HAN COMPRADO "POR UN PRECIO SIMBÓLICO" LA EMPRESA VALMOR SPORTS , ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMULA 1, PERO SE HACE CARGO DE 30 MILLONES DE € DE DEUDA.*

*El Viernes es el día mundial del Cáncer -Te agradecería que lo re-enviaras El 93% no lo hará*

*Ah!!! La única petición es que mantengas esto circulando, aunque solo sea a una persona más. Por la memoria de alguien que conozcas que ha sido vencido por el cáncer o que aún vive con él."*

Para todos es evidente, o debería serlo, que hay distintas clases de prioridades, y esa categorización de prioridades es la que tendría que ser la hoja de ruta de los poderes públicos en su actuación.

Financiar un campeonato de golf no es función de los poderes públicos ¿Cómo se puede justificar el gasto de tres millones de euros de dinero recaudado vía impuestos (aportado por toda la ciudadanía) en una actividad minoritaria, elitista y de escasísima trascendencia social? En realidad no se puede. No hay nada que lo justifique.

Si, como ocurre con frecuencia, se alega que este gasto potenciará la actividad económica de la zona y ello revertirá en ingresos muy superiores a la cantidad invertida, la respuesta es evidente: que realicen la inversión inicial quienes se van a ver beneficiados por la actividad económica resultante. En este caso estamos ante un caso típico en que la actuación corresponde, sin género de dudas, a la iniciativa privada. Solo merece ser calificada de estafa la utilización de dinero público para generar beneficio privado.

Sobre el proyecto de las torres de Calatrava, con un coste de quince millones de euros únicamente por el proyecto, decir que es probablemente uno de los brindis al sol más caros de la historia. No voy a entrar en las

críticas de las que se ha hecho merecedor Santiago Calatrava por sus diseños, en los que priva su magnificencia sobre la utilidad real y aprovechamiento del espacio, algo realmente importante si estamos hablando de construcciones públicas y con dinero público. Pero lo cierto es que cuando los políticos deciden gastar fondos aportados por la ciudadanía deberían tener en especial consideración la utilidad que dicha ciudadanía va a obtener con su esfuerzo económico. Que lo obtenido en este caso, a cambio de los quince millones de euros, sean simplemente los planos de tres moles y sus respectivas maquetas es, cuando menos, una incuestionable demostración de ineficacia en la gestión pública, y crea serias dudas sobre la honestidad de todo el proceso.

Mención a parte merece la obsesión por la construcción de esas enormes torres. En el fondo, el motor principal que mueve la misma es más el prestigio que genera, en primer lugar a los arquitectos que las diseñan y, seguidamente, a quienes se enganchan al proyecto. Pero es muy discutible la conveniencia de estas construcciones, aunque este es otro tema que trataremos en otro artículo.

Si los dos casos comentados son evidentes ejemplos de una utilización negligente de fondos públicos, vinculada a intereses ajenos a la ciudadanía y sospechosos de incluir actos punibles, el tercer caso no se queda atrás sino todo lo contrario.

La constitución del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia fue, ante todo, producto de la cabezonería política del PP. No es lógico que hoy se permitan circuitos urbanos, y menos aun que estos sean promovidos por el poder público, que debería velar por los intereses generales de la comunidad.

No vamos a hablar de las incontables molestias a que están sometidos los vecinos del área en la que se desarrolla la carrera, durante más de un mes (las instalaciones de las infraestructuras necesarias para adecuar el circuito cada año, con los consiguientes cierres de vías, dificultan enormemente la vida ciudadana durante todo ese tiempo). Solo haremos referencia al "espléndido negocio" que se preveía con la llegada de la Fórmula 1 a Valencia, y que ha resultado ser el "cuento de la lechera". Los promotores, que se veían nadando en euros, no dudaron en supeditar el interés público al negocio privado, personalizado por Valmor Sports. Despertados del sueño, que ha resultado ser pesadilla, el gobierno valenciano se queda la empresa. Eso sí, "por un precio simbólico", y haciéndose cargo de los treinta millones de euros de deuda.

Encima nos toman por tontos. ¡¡Solo faltaría que por las acciones de Valmor Sports se pagara una millonada cuando la empresa está en quiebra!! ¡¡Un gran favor les hacen a los accionistas al quitarles de encima los

acreedores!! Favor que tendrá que pagar la ciudadanía. Y una vez más se aplica el doble rasero económico: privatizar beneficios y socializar pérdidas.

Por el contrario, la guadaña recortadora no ha tenido el más mínimo miramiento a la hora de cebarse en Centro de Investigación Príncipe Felipe. Todo lo contrario de lo que, quienes asumen funciones públicas, deberían hacer.

Más allá de la evidente necesidad de potenciar la investigación de temas como la cura del cáncer, toda la investigación, médica o no, debería ser realizada bajo control público. Son varias las razones para ello, pero voy a centrarme en dos concretas:

Las investigaciones realizadas por la iniciativa privada están condicionadas por la esperada obtención de beneficios. Ello implica que si esta no existe o es escasa, la investigación se abandona, por muy necesaria que sea para la sociedad. Un ejemplo, la investigación sobre nuevos antibióticos hace más de treinta años que está abandonada. Para los laboratorios farmacéuticos es más rentable dedicar los recursos a la investigación de medicamentos paliativos de enfermedades crónicas (un cliente para toda la vida) que a la de antibióticos (un tratamiento de 10 a 15 días). O incluso, mejor aun, dedicarse a los productos antiedad. Esos que mantienen nuestro aspecto joven. Después de todo, a nadie le gusta volverse viejo y todos somos clientes potenciales (sobre todo si estos productos van acompañados de una buena campaña publicitaria)

El otro aspecto que quiero destacar es que someter los resultados de las investigaciones a la lógica del mercado lleva implícito excluir a, un mayor o menor, sector de la población de los beneficios de los mismos. Al supeditar el acceso a los beneficios de los resultados de las investigaciones a que estos puedan ser adquiridos por los usuarios en función de sus recursos, parte de los mismos carecerán de dinero suficiente para ello. Si estamos hablando de un procedimiento de cura, una parte de la población tendrá que resignarse a padecer la enfermedad, incluso morir, por falta de capacidad adquisitiva. Esa lógica es simplemente aberrante, y dice mucho de la catadura moral de quienes la defienden.

Pero la realidad con que nos enfrentamos es la de encontrarnos con que quienes deberían defender y garantizar lo público, son los mismos que defienden los intereses privados. Mientras los zorros sean los guardianes del gallinero, estamos condenados a pasar hambre.